

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTES	: JOSÉ EMMANUEL TOBÓN VILLA
DEMANDADOS	: CORPORACIÓN LEÓN XIII Y MUNICIPIO DE BELLO
LLAMADO EN GARANTÍA	: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-001-2016-01026-01
RADICADO INTERNO	: 222-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 264

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve los recursos de apelación en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se CONDENE a la Corporación León XIII al pago de salarios (1º de julio); reajuste de la liquidación, con base en el salario devengado mensualmente; reajuste de la liquidación, con base en los días trabajadores hasta el 1º de julio de 2016; reajuste de la cotización al sistema de seguridad social en pensiones; la indemnización por despido sin justa causa; la sanción moratoria por el pago deficitario de la liquidación y no pago de salarios.

Fundamenta sus pretensiones en que, se vinculó a la Corporación León XIII mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el 16 de febrero de 2016 con fecha de terminación del 10 de junio de 2016; debía prestar sus servicios de docencia para estudiantes de primaria y secundaria en la cárcel Bellavista; este contrato se ejecutó en virtud del vínculo entre el Municipio de Bello - Secretaría de Educación y la Corporación León XIII, la cual envió al demandante como docente a la Cárcel Bellavista; el Municipio de Bello se

benefició de la labor realizada por el demandante, por lo cual, existe solidaridad entre la Corporación León XIII y el Municipio de Bello; el contrato celebrado entre las entidades demandadas, es el 0035 de 2016. La remuneración de este contrato era de \$996.000 mensuales.

El 13 de febrero de 2016, firmó contrato de prestación de servicios con la Corporación León XIII, para prestar sus servicios de docencia, contrato en el que debía realizar bajo subordinación y prestación personal del servicio, idénticas labores que en el contrato laboral firmado el 16 de febrero de 2016, solo que en éste contrato era para prestar sus servicios los días sábados en la Institución Educativa León XIII, Sede Principal en el Parque de Bello, enseñando a jóvenes y adultos bajo la modalidad de bachiller por ciclos.

Bajo el contrato de prestación de servicios, el demandante trabajaba 10 horas el día sábado, recibía en promedio un salario de \$360.000 mensuales; la fecha de finalización era el 30 de noviembre de 2016.

El 12 de mayo de 2016 recibió preaviso de terminación de su contrato laboral, tal y como se dejó constancia en la carta de preaviso que firmó y está en poder de la Corporación León XIII; no obstante haber recibido preaviso, para la terminación del contrato laboral, el 12 de mayo de 2016, después del 10 de junio, que era la fecha de terminación, continuó laborando para la Corporación León XIII bajo el mismo contrato, por lo que se prorrogó. El en el mes de julio de 2016, el demandante habló con su empleador para solicitar el pago del mes de junio, razón por lo que fue despedido el 1º de junio y le informaron al demandante que tampoco debía volver a trabajar los días sábados. El 15 de julio recibió consignación de la liquidación del tiempo trabajador hasta el 10 de junio de 2016, en la que solo le tuvieron en cuenta el salario de \$996.000 y no los \$360.000 adicionales que devengaba por el trabajo de los sábados.

Manifiesta el demandante que se le hizo una bonificación en la liquidación consignada a su cuenta, cuando le adeudaban 20 días laborados del mes de junio; no le fue pagado el día trabajado y que corresponde al 1º de julio; ni la indemnización por el despido injustificado; nunca le pagaron auxilio de transporte. Y manifiesta que citó a la Corporación León XIII ante el Ministerio del Trabajo a la cual no asistió. El 11 de septiembre de 2017 presentó derecho de petición al Municipio de Bello, reclamando el pago, en forma solidaria, de las prestaciones e indemnizaciones; y el 26 de septiembre de 2017 el Municipio de Bello dio respuesta negando lo solicitado.

CONTESTACIÓN DEMANDADA

El Municipio de Bello en la contestación de la demanda manifestó que es cierto el derecho de petición presentado ante el Municipio de Bello y la respuesta dada el Municipio de Bello, pero aclaró, que se debe tener en cuenta la respuesta dada por el ente territorial, bajo el radicado 20172052127 de los anexos de la demanda. No le constan los demás hechos de la demanda. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones, peticiones o declaraciones de la demanda.

El Municipio de Bello, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, para que respondiera integralmente por el eventual pago que tuviere que hacer el Municipio de Bello, por la eventual condena que se le imponga en la sentencia, con fundamento en la póliza No. 515-47-994000005577 (pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones), la cual se encuentra vigente (fls. 80 a 84 del expediente digital 1).

La curadora ad litem de la accionada Corporación León XIII dio respuesta a la demanda, informando frente a hechos relacionados con el derecho de petición elevado al Municipio de Bello y la respuesta dada al mismo, no son hechos sino una apreciación de la parte accionante. Que no le constan los hechos de la demanda. En relación a las pretensiones de la demanda, se atuvo a los hechos y a los documentos probados (fl. 90 a 93 expediente digital 1).

La llamada en garantía Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia dio respuesta a la demanda señalando que es cierto el derecho de petición elevado al Municipio de Bello, según los documentos aportados. Que si bien, existe copia del contrato laboral celebrado por el demandante y la Corporación León XIII, se desconocen las condiciones específicas del contrato laboral celebrado entre el demandante y la Corporación León XIII. Que no se aportó prueba que demuestre que el contrato laboral objeto de la presente demanda, se haya dado en virtud del contrato 0035 de 2016 celebrado entre la Corporación León XIII y el Municipio de Bello. No es cierto que exista solidaridad entre la Corporación León XIII y el Municipio de Bello en virtud del contrato 035 de 2016, porque no existió relación laboral entre el demandante y el Municipio de Bello; no es cierto que el demandante haya recibido consignación de la liquidación del tiempo laborado teniendo en cuenta solo el salario de \$996.000 y no los \$360.000 adicionales que devengaba los sábados, porque la liquidación fue

realizada de manera correcta, con base en el salario devengado por dicho contrato, que ascendía a \$996.000; asegura que el Municipio de Bello dio respuesta al derecho de petición, que no se negó todo, sino que en forma correcta se aclaró que la relación laboral era únicamente con la Corporación León XIII, por lo que las solicitudes debían presentarse ante esta última entidad. No le constan los demás hechos. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

Y respuesta al llamamiento en garantía indicó que no es cierto que deba responder integralmente por el eventual pago que tuviere que hacer el Municipio de Bello, porque de acuerdo con el funcionamiento de las pólizas de cumplimiento, en el caso concreto, la Aseguradora Solidaria de Colombia, expidió la póliza de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales No. 515- 47-994000005577 el cual tiene como afianzado a la Corporación León XIII y como asegurado y beneficiario, el Municipio de Bello, con los amparos contratados de cumplimiento, pago de salarios e indemnizaciones, es decir, que en dicha póliza se ampara el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, derivados de un eventual incumplimiento del afianzado es decir, la Corporación León XIII, del contrato 035 de 2016, el cual constituye el contrato objeto de la póliza de cumplimiento No. 515- 47-994000005577, advirtiendo que la Aseguradora Solidaria de Colombia no ampara la responsabilidad general de la Corporación León XIII (fl. 101 a 109 del expediente digital 1)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 8 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello, DECLARÓ que entre el Sr. José Emmanuel Tobón Villa y la Corporación León XIII, existieron dos contratos, pactados así:

- (i) Un contrato de trabajo entre el 16 de febrero al 10 de junio de 2016
y
- (ii) otro contrato de naturaleza civil o comercial, entre el 13 de febrero al 30 de noviembre de 2016.

ABSOLVIÓ a los demandados de las demás pretensiones incoadas en su contra, por el demandante. Impuso costas en esta instancia, a cargo de la parte demandante.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la parte demandante manifiesta que su representado tuvo dos contratos, como él lo manifestó, donde el primero de ellos era de trabajo y el segundo era un contrato de prestación de servicios, sin embargo, este último, según lo manifestado por el actor y según el contrato aportado, era similar al que se estaba prestando en la Cárcel Bellavista.

Que el demandante reconoció que le consignaron un dinero y manifestó que había sido liquidado parcialmente, no obstante, conforme las obligaciones consagradas al empleador, la Corporación demandada debió entregarle al demandante al momento de la terminación, un soporte donde quedara claro lo pagado, y en el proceso no se aportó por el Municipio de Bello, documento alguno donde estuviera claramente establecido, lo liquidado; y en el Código Sustantivo del Trabajo se consagra, que para liberar la obligación del empleador, debe consignar a la orden judicial, porque el servicio se presentó en el Municipio de Bello; que el A quo debió dar la autorización para realizar dicha consignación y la misma no aparece. Señala que el demandante obró de buena fe al reconocer que se dio una liquidación parcial.

Que a pesar que el art 65 del CST dice que, a la terminación del contrato de trabajo, el empleador tiene que entregar al trabajador copia de las prestaciones sociales, ello no fue cumplido.

En relación al contrato civil o comercial entre el Municipio de Bello y la Corporación León XIII, señala que la cláusula compromisoria no opera, toda vez que hubo una relación laboral regida bajo el Código Sustantivo del Trabajo, dado que el docente no puede dar las clases que él quisiera, ni podía ir a donde él quisiera a dar la clase, sino que la clase se tenía que dar en la Sede de la Corporación León XIII donde tenía 10 horas; en la hora catedra, él no podía desbordarse del objeto de la contratación, lo que quiere decir que hubo una continuidad de la relación laboral bajo la continuada subordinación y dependencia de parte de la Corporación León XIII. Considera que no le asiste razón a la aseguradora, cuando asegura que para dar aplicación a la cláusula compromisoria se deba ir a un Tribunal de Arbitramento, porque ante la burla a los trabajadores, como sucedió en este caso, el A Quo en ningún momento ha protegido al demandante en aplicación de la Constitución Nacional, al ser claro que el actor tenía una relación laboral, ya que el mismo demandante manifestó que siempre la supervisora estaba vigilando y hubo correos electrónicos donde le indicaban las clases y el horario de trabajo, sin que

quedara al arbitrio de la persona que estaba prestando el servicio dar el horario que él quisiera. Solicita se verifique el contrato de prestación de servicios, en la cláusula compromisoria.

Frente al documento de terminación del contrato, dice la aseguradora que dudaba del logo de la Corporación, pero se debe observar que dicho documento se encuentra firmado por la representante legal quien suscribió el contrato con el Municipio de Bello.

Narra que el demandante tuvo incapacidades, las cuales fueron entregadas a la Corporación León XIII. Se cuestiona la apelante, que si era cierto que el actor tenía contrato de prestación de servicios, por qué no se le exigió el pago de la seguridad social como independiente?; igualmente cuestiona la buena fe de la parte pasiva de la litis, ante la respuesta dada al derecho de petición elevado al Municipio de Bello y por la inasistencia de la Corporación León XIII a la citación realizada al Ministerio del Trabajo.

Expresa que hubo una terminación del contrato, pero obra prueba que el demandante continuó laborando, sin que le hayan pagado los salarios de junio ni del 1º de julio, y con la decisión se premia a los demandados a pesar de tener la obligación de garantizar los derechos sociales y laborales.

Considera que el Municipio de Bello es solidariamente responsable con base en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y en el art. 34 del CST.

Que es claro que el demandante dio un servicio en forma personal; lo hizo bajo la continuidad subordinación y dependencia de parte de la Corporación León XIII porque le daban ordenes; se aportó constancia de pago de la liquidación, pero se debe hacer la reliquidación de las prestaciones sociales; hay prueba de la carga académica, con lo que se demuestra que el demandante no podía dar una asignatura que no fuera asignada por la Corporación León XIII; y se demuestra la carga académica semanal y de los sabatinos.

Considera que se puede declarar una unidad de contrato porque hubo mala fe de la Corporación León XIII con el único fin de evadir obligaciones laborales, lo que da lugar a la indemnización moratoria del art 65 del CST.

Resalta que el Municipio de Bello hizo una convocatoria para la prestación del servicio; que el estado debe vigilar el servicio de Educación, pero no le está

cumpliendo al demandante con el pago de las prestaciones sociales acordado en el contrato celebrado entre el Municipio de Bello y la Corporación León XIII, donde dice que son garantes de la obligación.

Ante, la manifestación realizada por el A Quo de concluir el recurso, solicitó al Tribunal se tenga en cuenta que se sesgó el derecho de defensa.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la Aseguradora Solidaria de Colombia considera que la sentencia absolutoria debe ser confirmada en primer lugar, por ausencia de cobertura de la póliza. Al respecto refiere que el A Quo consideró que no se probó la subordinación, el despido sin justa causa, ni un incumplimiento contractual. Denota, que la póliza de cumplimiento, es una póliza adquirida por el contratista, y en este caso la Corporación León XIII, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en un determinado contrato frente al contratante, que lo es el Municipio de Bello, por lo tanto, el contratista funge como afianzado y es quien tiene la obligación de pagar la prima y mantener vigente el contrato de seguro, mientras que el contratante funge como asegurado y el beneficiario es quien, en caso de que el contratista incumpla con las obligaciones del contrato afianzado, tiene la facultad de afectar los amparos contemplados dentro del contrato de seguro. Este seguro de cumplimiento busca proteger el patrimonio del Municipio de Bello, ante un eventual incumplimiento de la Corporación León XIII frente a pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, derivado del contrato 035 de 2016.

Sin embargo, en este caso, no se demostró el incumplimiento de los contratos existentes, y mucho menos del contrato 035 celebrado entre el Municipio de Bello y la Corporación León XIII; adicionalmente, no existe cobertura de las pólizas expedidas por la aseguradora, pues no se probó que al demandante se le haya contratado para desempeñar sus funciones en virtud del contrato 035 de 2016. Por lo tanto, debe absolverse a la Aseguradora Solidaria De Colombia, al no existir justificación legal para afectar la póliza.

Frente a la solicitud del cobro de sanción por mala fe, se debe tener en cuenta que no es un riesgo amparado por la Aseguradora Solidaria, conforme se extrae de la carátula de la póliza donde se especifica que los riesgos amparados son de tipo legal y no sancionatorio.

En segundo lugar, en el hipotético caso de considerar que existe responsabilidad de la aseguradora, deberá tener presente que hay un límite del valor asegurado de la póliza expedida por la aseguradora, y en ese sentido la póliza N°515-47-994000005577 tiene un valor máximo asegurado de \$115.031.161,25, lo que hace que las obligaciones de la aseguradora no pueden sobre pasar dicho límite.

En tercer lugar, sostiene que la parte demandante está equivocada, porque en este proceso no se demostró que se hubiese presentado incumplimiento de los contratos firmados entre la Corporación León XIII y el demandante; no se demostró que el contrato de prestación de servicios fuera en realidad un contrato de trabajo como continuidad del anterior, al no demostrarse la subordinación; adicional a lo anterior, se probó que no hubo despido injustificado, porque los contratos en mención fueron suscritos con extremos determinados y no se probó la prestación del servicio por fuera de ese tiempo, y existió confesión del demandante, que la terminación del contrato le fue avisada con anticipación legal. También solicita se tenga en cuenta la ausencia de pretensiones en contra del Municipio de Bello, razón por lo que debe ser absuelta.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia, en virtud de los recursos de apelación, se centra en determinar: i) Si existió lugar a declarar la existencia de un contrato realidad, en relación al contrato de prestación de servicios celebrado entre la Corporación León XIII y el demandante y en consecuencia, si existió unidad de contratos; ii) Si el demandante tiene derecho al pago de los salarios de los meses de junio al 1º de julio de 2016; iii) Si hay lugar a la reajustar la liquidación de las prestaciones sociales; iv) Si existió despido sin justa causa; v) Si hay lugar a condenar al pago de la indemnización moratoria del art. 65 del CST; vii) Si hay solidaridad del Municipio de Bello.

Problema jurídico que se analizará en el siguiente orden:

1. En relación al contrato laboral y al contrato de prestación de servicios

De los hechos de la demanda se extrae que entre el demandante y la Corporación León XIII se celebró un contrato de prestación de servicios del 13 de febrero al 30 de noviembre de 2016, para desempeñarse como docente los

días sábados en la Institución Educativa León XIII, y celebró un contrato de trabajo desde el 16 de febrero al 10 de junio de 2016, para desempeñarse como docente en la Cárcel Bellavista de lunes a viernes, y en forma expresa, se narra en el hecho 4º de la demanda, que el contrato de prestación de servicios celebrado lo debía realizar bajo subordinación y la prestación personal del servicio, con idénticas labores al contrato laboral celebrado. Al analizar los hechos de la demanda y la pretensión que se dirige a reajustar la liquidación con base en el salario realmente devengado, si bien no es solicitado en la demanda, se puede concluir que el interés de la parte actora es que se reconozca el principio de la realidad sobre las formas y se declare que el contrato de prestación de servicios obedeció a un contrato de trabajo.

Para el caso en concreto, está probado en el plenario, que entre Sr. José Emmanuel Tobón Villa y la Corporación León XIII se celebraron dos contratos: el primero de ellos, un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, celebrado del 16 de febrero al 10 de junio de 2016, para desempeñarse como docente en la Institución Educativa León XIII Sede Bellavista, devengando un salario mensual de \$996.000 (fls. 18 a 21 del expediente digital 1); y un contrato de prestación de servicio, celebrado desde el 13 de febrero al 30 de noviembre de 2016, para desempeñarse como docente, con un pago de honorarios pro valor de \$9.000 la hora cátedra efectivamente dictada (fl. 22 a 23).

En primera instancia se absolvió de dicha pretensión, al considerar que conforme a los documentos obrantes, el demandante suscribió dos contratos para desarrollar su actividad como docente, advirtiendo que si bien, los contratos eran para desarrollar el mismo objeto, no se ejecutaron en el mismo lugar. Advirtió que frente al contrato de trabajo el demandante desempeñó su labor en la Cárcel Bellavista, y frente a él no se reclama suma alguna al haber manifestado el demandante que en el interrogatorio que le cancelaron las prestaciones sociales. Y frente al contrato de prestación de servicios, el mismo se celebró para dictar clases en la Institución Educativa León XIII en la sede Parque de Bello, y que con la prueba documental aportada y la recaudada en audiencia, consideró que a pesar de estar probada su existencia, no existe prueba en el proceso la prestación o ejecución efectiva del servicio del actor, lo que desvanece la presunción del art. 24 del CST al no poderse probar la subordinación, lo que hace que se concluya que la relación entre las partes fue de naturaleza civil o comercial y no laboral.

En lo que respecta a los aspectos apelados frente al contrato de trabajo, debemos decir lo siguiente:

- En el recurso de apelación se señala que el demandante aceptó haber sido liquidadas parcialmente las prestaciones sociales pero se debió entregar el soporte del pago a la terminación del contrato de trabajo. Sin embargo, a fl. 25 del expediente digital 1, la parte demandante aportó como prueba documental la liquidación de las prestaciones sociales definitivas calculadas desde el 16 de febrero de 2016 al 10 de junio de 2016, con lo que se entiende superado dicha inconformidad.

- Aseguró la parte demandante en su recurso de apelación, que se aportó un documento de terminación del contrato, el cual fue firmado por la representante legal quien suscribió el contrato con el Municipio de Bello. Afirmación que no es cierta, al no contar con sustento documental, ya que la prueba documental que reposa en el proceso no existe documento de terminación del contrato de trabajo. No obstante, lo que si se evidencia en el hecho 6º de la demanda, es la confesión del demandante, cuando acepta haber recibido preaviso de la terminación del contrato de trabajo el 12 de mayo de 2016 y que dicho documento no lo tiene en su poder. Confesión que da lugar a concluir que la Corporación León XIII informó al demandante la terminación del contrato de trabajo, el cual finiquitaba el 10 de junio de 2016.

- Señaló la parte demandante, que hubo una terminación del contrato y que obra prueba, que el demandante continuó laborando, sin que la Corporación León XII haya pagado los salarios de junio ni del 1º de julio.

Al respecto, teniendo en cuenta la confesión hecha por el demandante en el hecho 6º de la demanda, que aceptó la existencia del preaviso, donde le informaron la terminación del contrato de trabajo el 10 de junio de 2016, en relación a la continuidad de la labor entre el 11 de junio al 1º de julio de 2016, considera la Sala, que no existe prueba testimonial ni documental alguna, de la cual se logre determinar que el Sr. José Emmanuel Tobón Villa pese a tener conocimiento de la terminación del contrato de trabajo, continuó laborando para la Corporación León XII en el interregno enunciado. Debiéndose recordar a la parte demandante, que las afirmaciones realizadas por el demandante en su interrogatorio de parte exclusivamente tienen efecto en los eventos en que sean adversas a sus intereses, tal y como lo indicó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 803 de 2022 al señalar:

*“Debe iniciar la Corte por recordar que el interrogatorio de parte que absolvió la demandante sólo es susceptible de estudio en el recurso extraordinario **si contiene confesión, esto es, una manifestación que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a su deponente o que favorezcan a la parte contraria**, de acuerdo con la restricción contenida en el artículo 7 de la Ley 16 de 1969 y la descripción normativa del artículo 191 del CGP (CSJ SL 4802-2021).” (Resalto de la Sala)*

Por lo tanto, las afirmaciones dadas por el Sr. José Emmanuel Tobón Villa relativas a la continuidad en la labor de docente, con posterioridad al 10 de junio de 2016 y hasta el 1º de julio de la misma anualidad, por si sola, no es suficiente para ser tenido como prueba, por tratarse de aserciones que favorecen al mismo demandante y recuérdese que la finalidad del interrogatorio de parte es provocar la confesión en el demandante sobre los hechos presentados en la demanda, y no tomar lo favorable a sus intereses, pues además, todo lo manifestado allí quedará supeditado para ser objeto de prueba con los medios probatorios idóneos allegados al proceso. Y en este caso, no existe declaraciones de testigos que corroboren lo dicho por el demandante, así como tampoco se aportó a modo de ejemplo: planilla de notas, exámenes realizados por el demandante en calidad de docente, planilla de asistencia a clase, asistencia a reuniones de profesores, entre otros, de los cuales se extraiga la labor desempeñada del 10 de junio al 1º de julio de 2016.

En consecuencia, no se accederá a la solicitud de reconocimiento y pago de los salarios dejados de pagar en el mes de junio y del 1º de julio de 2016.

Frente a la inconformidad relacionada con el contrato de prestación de servicios, se considera lo siguiente:

- En el recurso de apelación, la parte demandante considera que se encuentra acreditada la prestación personal del servicio en forma personal, que lo hizo bajo la continua subordinación y dependencia de la Corporación León XIII, por existir una persona que le daba órdenes; dijo haber aportado prueba de la carga académica, con la que se demuestra que el demandante no podía dar una asignatura que no fuera asignada por la Corporación León XIII y la carga académica era semanal y los sabatinos; que en la hora de catedra, el demandante no podía desbordarse del objeto de la contratación.

Sea lo primero señalar en lo que respecta al requisito establecido en el artículo 23 del C. S. de T. subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, para que

exista contrato de trabajo se debe acreditar 1) “La actividad personal del trabajador”, 2) “La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador”, y 3) “Un salario como retribución del servicio”.

Por ende, es la parte demandante la que tiene la carga probatoria según lo establecido en los artículos 164 y 167 del C.G.P, de **demostrar la prestación personal del servicio con el empleador demandado y que, por ello, recibió una remuneración, además de los extremos temporales de la relación**; tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 5453 de 2018. Una vez probada la prestación personal del servicio nos encontramos ante la presunción del artículo 24 del C.S.T, el cual establece la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, debiendo de esta forma la parte demandada desvirtuar la subordinación para efectos de desacreditar dicha presunción., tal y como se ha expuesto por la jurisprudencia entre otras en sentencias 42167 del 2012, SL 878 de 2013, SL 6868 de 2017 y SL 1905 de 2018, y recientemente la sentencia SL 3847 de 2021 señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

“Esta Sala, en sentencia CSJ SL2879-2019, reiterando lo señalado en providencia CSJ, 24 abr. 2012, rad. 39600, sobre este aspecto, se puntualizó:

«...De lo anterior se extrae que probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume.

Por ende, muy poco le sirve al demandado, para exonerarse de las obligaciones propias del contrato de trabajo, la aceptación de la prestación del servicio de manera continua con la sola negativa de la existencia del contrato de trabajo, o la sola afirmación de que se trató de un contrato de distinta naturaleza.

Si el demandado acepta la prestación del servicio, pero excepciona que lo fue mediante un contrato civil, como sucedió en el sub lite, le allana el camino el demandante para ubicarse en el supuesto de hecho contenido en el artículo 24 del CST y ampararse en la presunción de que se trató de un contrato laboral. En cuyo evento, el demandado tiene a su cargo desvirtuar la presunción mediante pruebas que demuestren, con certeza, el hecho contrario del elemento de la subordinación, es decir que la prestación personal del servicio se dio de manera independiente.

*En este caso el juez debe proceder al análisis probatorio teniendo en cuenta, como lo ha dicho de antaño la jurisprudencia, “...que no ha sido extraño para la jurisprudencia y la doctrina que en muchas ocasiones se pretende desconocer el contrato de trabajo, debiéndose acudir por el Juzgador al análisis de las situaciones objetivas presentadas durante la relación, averiguando por todas las circunstancias que rodearon la actividad desarrollada desde su iniciación, **teniendo en cuenta la forma como se dio el acuerdo de voluntades, la naturaleza de la institución como tal, si el empleador o institución a través de sus directivos***

daba órdenes perentorias al operario y como las cumplía, el salario acordado, la forma de pago, cuáles derechos se reconocían, cuál horario se agotaba o debía cumplirse, la conducta asumida por las partes en la ejecución del contrato etc., para de allí deducir el contrato real, que según el principio de la primacía de la realidad, cuando hay discordia entre lo que se ocurre en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

Quiere decir lo anterior que la relación de trabajo no depende necesariamente de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentra colocado. Es por ello que la jurisprudencia y la doctrina a la luz del artículo 53 de la Carta Política, se orientan a que la aplicación del derecho del trabajo dependa cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuando de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento aparecen circunstancias claras y reales, suficientes para contrarrestar las estipulaciones pactadas por las partes, por no corresponder a la realidad presentada durante el desarrollo del acto jurídico laboral. (...)

Como prueba documental aportada se encuentra: contrato de trabajo celebrado por el demandante y la Corporación León XIII (fls. 18 a 21); contrato de prestación de servicios (fls. 22 a 23); liquidación de prestaciones sociales del 16 de febrero al 10 de junio de 2016 (fl. 25); consignación del valor de la liquidación (fl. 26); correo electrónico de carga académica por los días lunes a viernes (fls. 27 a 29); acta de no comparecencia del Ministerio del Trabajo (fl. 30); contrato de trabajo y liquidación de prestaciones sociales del Sr. Oscar de Jesús López Cadavid (fls. 31 a 35); contrato de “Prestación del servicio público educativo en el programa ampliación de cobertura educativa en el Municipio de Bello” No. 0035 de 2016 celebrado entre el Municipio de Bello y la Corporación León XIII (fls. 49 a 64); derecho de petición elevado al Municipio de Bello y la respuesta dado por el mismo (fls. 65 a 67).

Y el demandante absolvió interrogatorio de parte, en el que dijo haber sido contratado por la Corporación León XIII para trabajar en dos entidades que ellos manejaban directamente; fue contratado para trabajar en la Cárcel de Bellavista de lunes a viernes y el sabatino de 7 am a 5pm; que celebraron un contrato laboral inferior a un año, y el segundo contrato era del sabatino se decía que era de prestación de servicios, lo cual no se cumplía porque tenía que desempeñar una cantidad de funciones como un contrato normal; que eran dos contratos porque en uno laboraba en la Cárcel de Bellavista y el otro trabajaba los sábados en la Sede Principal; que el jefe inmediato era la representante legal de la Corporación León XIII pero nunca la conoció, habían coordinadores, donde el Sr. Fred Mena era el de la Cárcel de Bellavista y la Sra. Rosalba o Giovanny en el sabatino. El Sr. Fred Mena le daba ordenes de

lunes a viernes cuando estaba en la Cárcel de Bellavista, y en el sabatino la Sra. Rosalba. En el sabatino le cancelaban \$360.000 y en la Cárcel de Bellavista la cancelaban \$992.000; el horario era de lunes a viernes de 8am a 4pm en la Cárcel de Bellavista y en el sabatino de 7am a 5pm. Le realizaron un pago, pero no corresponde a la totalidad de los contratos y no sabe lo que le pagaron. Que a él le cancelaban una mensualidad, pero no le cancelaron la totalidad de lo que le debían haber liquidado por ambos contratos, recibió un pago parcial. Tuvo dos contratos de índole diferente; recibió consignación producto de la liquidación del primer contrato de trabajo a término fijo; que es cierto que en el contrato de prestación de servicios se obligó en forma independiente, autónoma y sin subordinación, pero sí había subordinación en ese contrato. Que el despido unilateral del 2 de julio de 2016 fue verbal; cumplió cabalmente el contrato de prestación de servicios; no tenía que pasar cuenta de cobro ni pagar seguridad social; en el contrato de trabajo había pago de seguridad social, pero lo hicieron por un salario mínimo.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta la carga mínima probatoria que recaía en cabeza del demandante, brilla por su ausencia en el expediente, prueba que dé certeza de lo relatado en los hechos de la demanda y lo afirmado en el interrogatorio de parte, en relación a la prestación efectiva del servicio del Sr. José Emmanuel Tobón Villa a la Corporación León XIII los días sabatinos en la Sede Principal de la entidad demandada, y tan es así, que de los correos electrónicos aportados por la parte demandante se extrae únicamente, la asignación de clases de lunes a viernes, que según lo narrado por el demandante, corresponde al contrato laboral celebrado y que era ejecutado en la Cárcel Bellavista, pero nada se infiere de las asignaciones de clases para los días sábados en desarrollo del contrato de prestación de servicios.

Tampoco existe prueba testimonial ni documental (recibos de nómina, ordenes entregadas por escrito, pagos que se le efectuaban, pagos a seguridad social realizados por la Corporación León XIII, certificaciones expedidas por el lapso en que laboró, etc) para la demostración de la remuneración que recibió por la labor desempeñada los sábados en virtud del contrato de prestación de servicios. Y mucho menos se demostró los extremos en los cuales el Sr. José Emmanuel Tobón Villa laboró los días sábados.

Por lo tanto, lo legal y pertinente será CONFIRMAR la sentencia en este punto en concreto. Y conforme a la decisión adoptada, no se hace necesario analizar los demás puntos de apelación.

Costas en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a cargo de la accionante, por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia en la suma de \$1.000.000 a cargo de la accionante, por no prosperar el recurso de apelación interpuesto.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: JOSÉ EMMANUEL TOBÒN VILLA
DEMANDADOS	: CORPORACIÓN LEÓN XIII Y MUNICIPIO DE BELLO
LLAMADO EN GARANTÍA	: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-088-31-05-001-2016-01026-01
RADICADO INTERNO	: 222-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 13 de octubre de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 13 de octubre de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO